

¿Gobierno de concentración nacional?

3 - 18 - 72

LUIS SOLANA
Diputado PSOE por Segovia

Unas declaraciones del presidente del Congreso de Diputados, Alvarez de Miranda, ciertos editoriales del diario *Ya*, y las intervenciones del secretario general del PCE, Santiago Carrillo, todos apuntando hacia la conveniencia de un Gobierno de concentración nacional, pueden sugerir algunas reflexiones.

El razonamiento básico de los apologistas de este tipo de Gobierno es que, ante una situación grave de la economía nacional, y precisamente cuando se restablece la democracia, debe ser todo el colectivo político quien se implique en la solución.

Que la situación económica es delicada, no lo niega nadie. La ineptitud o la inoperancia económica de los gobernantes de los últimos años (incluido el propio Suárez, no se olvide); la auto-defensa insolidaria de los intereses oligárquicos de los grandes grupos financieros e industriales; la falta de controles democráticos que denunciase la corrupción; el silencio forzado de la pequeña y mediana empresa; la nula presencia de los trabajadores en la vida social y económica del país, todo ello, ha colocado a España en posición más complicada que otros países para resolver una crisis que afecta al mundo entero.

Sin que este tema pudiera ser (por unos) o quisiera ser (por otros) suficientemente expuesto ante los ciudadanos, se han celebrado las primeras elecciones generales en cuarenta años. Los resultados son que seis millones de votantes se inclinaron por el conglomerado UCD, cinco millones por el PSOE y cantidades mucho menores por otras formaciones políticas.

Inmediatamente después de las elecciones, el partido relativamente mayoritario conformó Gobierno a su imagen y semejanza. (Por cierto, sin que el Jefe del Estado evacuara las necesarias consultas con los demás partidos para conocer si había otras combinaciones alternativas.)

Ahora, este Gobierno empieza a dar soluciones a la crisis económica. Y, lógicamente, utiliza la metodología y las fórmulas que van desde las recetas tradicionales de la derecha hasta las medicinas modernas del centro. No hay por qué extrañarse, ni por qué llamarse a engaño: el Gobierno deberá actuar con la co-

herencia de un mandato de origen y de fidelidad electoral bien clara: Está defendiendo los intereses de los grupos que representa. A la vez, los sectores sociales que se ven perjudicados por esta actitud y que disponen de alternativas más justas para solucionar la crisis a través de sus partidos (como ocurre con el PSOE), se preparan a defender sus opciones en el Parlamento.

Exactamente en ese momento se inicia la ofensiva para obtener un Gobierno de concentración nacional que incluya a todos los partidos, es decir, a todos los intereses.

Desde la posición de una democracia recién estrenada, lo lógico es que el grupo político que ha recibido el encargo de dirigir el país lo haga. Si dentro de unos meses se demuestra que es incapaz de resolver la situación, lo coherente es que sea la siguiente formación política en potencia electoral la que intente la solución. Esto no sólo porque sea la segunda con escasa diferencia con la primera, sino porque significa la posibilidad de que otros intereses cumplan su turno de Gobierno; porque significa el inicio de la auténtica incorporación de todo el pueblo al Estado; porque significa el final de los poderes oligárquicos que permanecen intactos; porque significa el inicio de un proceso irreversible de igualdad. ¿En nombre de qué se les va a quitar esta posibilidad? ¿Por qué esa insistencia desde cierta derecha y desde cierta izquierda para que ese Gobierno sea pasado por el agua de la concentración nacional?

Desde la derecha existe un intento de anticipación ante posibles fracasos del actual Gobierno. Efectivamente, para cerrar en esa eventualidad el paso a un Gobierno de izquierdas, la mejor solución —aunque parezca lo contrario— sería el implicarla en el propio Gobierno. Suárez, maestro de las negociaciones sin objetivo, empezaría la experiencia de *compartir responsabilidades y no poderes*. ¿Entenderían los que han votado un intento de opción alternativa que los partidos que la representan difuminaran tal posibilidad en esa imagen im-

posible de comprender de un Gobierno de todos mezclados y presididos por la derecha de siempre? La operación desde este ángulo tiene todo el sentido de una operación de recambio por si las cosas no ruedan bien a fin de año.

Desde cierta izquierda, la cuestión parece también basada en puro oportunismo táctico. Efectivamente, si no es posible llegar al Gobierno por el cauce de la pura aritmética de los votos, hay que encontrar otro camino, aunque con ello se ponga en entredicho tanto la propia esencia de la democracia como —lo que es peor— los intereses de los grupos sociales que pretenden representar. Porque no habrán pensado llevar adelante sus ideologías formando parte como mínima minoría de un Gobierno de amplio espectro dominado por la derecha.

Es curioso comprobar cómo los dos grupos más entusiastas de este Gobierno de concentración son, precisamente, las formaciones políticas más atentas al proceso italiano. Pero ambas están traduciendo el fenómeno italiano al español con demasiada presteza. La situación italiana viene de lejos y está en una posición de difícil equilibrio entre el PCI y la DCI. Un PCI —además— con la más poderosa fuerza sindical tras de él. A dos dedos electorales del poder, el PCI puede ser coherente al lanzar el «compromiso histórico» porque esos dos dedos pueden costar hoy por hoy una involución de corte reaccionario que el PCI no puede arriesgar. Está intentando romper, a un coste hoy todavía difícil de medir, el maleficio del poder para los PC en Occidente.

Pero, en España, la alternativa no es esa, sino UCD-PSOE, alternativa que no va a contar con la amenaza de una marcha atrás violenta, y que no rompe el maniqueo análisis de las dos superpotencias internacionales.

Si en nuestro país, la derecha quiere la complicidad de la izquierda para seguir en el poder, no ha entendido el proceso electoral; y si cierta izquierda quiere obtener tarjeta de solvencia con su participación ministerial, no ha comprendido que el PSOE sí quiere ser una alternativa de poder, representativa de las clases sociales y de los intereses que hoy no gobiernan.